

• El movimiento comunal y la deuda externa

Oscar Gutiérrez
Coordinadora Nacional Comunal

A nombre de la Coordinadora Nacional Comunal nos hacemos presentes precisando que este problema de la deuda externa también lo hemos discutido en los cinco encuentros nacionales de los dos últimos años. Me parece que hay que presentar soluciones alternativas al problema. Algunas de las intervenciones dejan claro que la preocupación de los economistas que caracterizan la línea general de la burguesía es la de presentar el problema de la crisis económica a los sectores populares buscando su solidaridad en las soluciones que se adopten. Lo que hay que buscar entonces es cómo los sectores populares nos identifiquemos en líneas de acción para resolver nuestros propios problemas y en un modelo de desarrollo que nos permita resolver nuestra crisis.

La solución política

Lo que nos muestra en líneas generales es que la solución a la deuda no parte de darle un tratamiento jurídico o convencional, sino de darle un tratamiento de carácter político. Por eso nuestra apreciación es que de allí tiene que partir la solución de la crisis. Colombia ha experimentado todos los métodos y mecanismos sin éxito. Pero sin embargo no se tocan algunos elementos de carácter estructural, que son los que pueden viabilizar una salida a la crisis de endeudamiento. Eso no lo tocan porque está muy ligado a los intereses sociales que representan. Por lo tanto, nosotros que no somos los herederos de los intereses de la banca internacional, tenemos que plantear soluciones que toquen la estructura del Estado. Hacerlo significa partir de la necesidad de establecer reformas de carácter político y social en el mismo modelo de desarrollo económico que permita una mayor participación y una mayor democratización de la vida política del país.

Eso está ligado al tratamiento que le damos nosotros a la tenencia de la tierra, al problema de la empresa privada, de su rentabilidad. Hoy hemos conocido en los informes, en los balances que presentan la mayoría de las empresas financieras, de las grandes empresas capitalistas utilidades que pasan de miles de millones de pesos. Sin embargo el mismo Presidente de la Anif decía que si bien Colombia tenía un desarrollo económico estable, positivo, desde el punto de vista político había una crisis estructural. Esa crisis se genera de las contradicciones que existen entre las políticas del Estado dirigidas a producir una mayor rentabilidad de las empresas, mediante el problema del sacrificio del salario. Las limitaciones del presupuesto hacia el sector social producen elementos de confusión interior que son evidentes en casi toda la geografía del país.

En poco tiempo hemos observado que en el país se genera un movimiento de carácter cívico que ya tienen una mayor cobertura. Abarcan el municipio, el departamento, regiones enteras de Colombia. Se identifican en una actividad de carácter cívico para exigir del Gobierno soluciones de fondo a los problemas de carácter social. Ahí están los paros cívicos del suroriente, del Chocó, de Nariño, están las movilizaciones campesinas.

El Estado descarga la deuda en el pueblo

Debido a que las políticas del Estado se dirigen fundamentalmente a garantizar el buen crédito con la banca internacional, éste destina la mayor cantidad de recursos de la economía nacional para defender estos créditos. Y por eso hace todos los esfuerzos de carácter tributario y jurídico para garantizar que el servicio de la deuda quede garantizado para la banca internacional. Estas políticas ni siquiera plantean la renegociación y mucho menos la moratoria, y tampoco hacer negociaciones conjuntas con los países acreedores. Porque si bien Colombia tiene una situación satisfactoria en cuanto a ser un socio muy cumplido con la banca internacional, incumple con el pueblo colombiano en la satisfacción de la mayoría de sus necesidades.

Los datos del DANE, que no son muy precisos, reflejan que hay un 51% de la población colombiana que vive en la pobreza absoluta, lo que refleja un índice bastante alto. Estos índices son bastantes dicientes de la concentración del poder económico y social. ¿Y cómo se responde por parte del Estado? Con una mayor elevación del presupuesto para las medidas de carácter policivo. Es así que el presupuesto para el Ministerio de la Defensa para 1988 arroja la cifra de \$152.000 millones de pesos, lo que muestra claramente en qué dirección va la política del Estado. Principalmente los sectores populares luchan por el derecho a la vida que está muy relacionado con la deuda externa, en tanto define la supervivencia. Y lo discute el movimiento popular cuando se ha entronizado en el Estado la política que hemos caracterizado como el militarismo; el movimiento popular, al contrario de lo que ocurría en el pasado tiene alternativas. Pienso que las políticas de militarización de la vida colombiana se corresponden por las alternativas que el pueblo colombiano está manejando para solucionar sus problemas. Confrontación que existe entre una burguesía que es mezquina ante las necesidades populares y ante las reformas políticas y sociales que necesita la nación. Y como se trata de una confrontación será mediante la organización como se garantizará que esas reformas se conquisten.

Hay unos indicativos que nos señalan esa militarización de la vida nacional. En Bogotá existen 110 CAI, lo que signi-

fica que hay un CAI por cada 10 barrios. En Bogotá las empresas de servicios públicos son las que tienen mayor índice de endeudamiento y entrarán en corto plazo en crisis para resolver los problemas de los 350 barrios que en la capital no tienen servicios públicos. Lo otro que refleja esta posición es un cambio de actitud y de mentalidad de las Fuerzas Armadas. Hay una actitud más beligerante y más participativa en la vida civil. Las brigadas cívico-militares, la actitud frente a cualquier problema político nacional, las actividades desarrolladas en torno a la niñez, nos muestran que la conducta del Estado tiene una actitud consultiva respecto de la cúpula militar.

No podemos plantear que el problema de la deuda externa lo soluciona una insurrección popular, o una transformación total de las estructuras sociales por las vías democráticas o parlamentarias. Hay que plantear soluciones inmediatas que ayudan a soportar la crisis. Nos parece positivo la actitud del gobierno del Perú que, si bien es una solución de emergencia, nos permite ir desarrollando medidas que conduzcan a moratorias de un corto plazo de la deuda. La misma moratoria se constituye en una medida de carácter coyuntural que permite un respiro a las organizaciones populares.

En este sentido proponemos una moratoria de 3 años para las empresas públicas de Bogotá. En Bogotá el 30% de la población es inquilina, lo que refleja el grave índice de la vivienda.

Como conocemos que la mayoría de los recursos de los que se va a apropiarse el Estado van a dirigirse para el pago del servicio de los intereses de la deuda, nos parece entonces, que las organizaciones populares debemos responder con una gran convergencia. Nos parece positivo también el surgimiento de la CUT, porque a partir de ella podemos generar un gran movimiento popular, que nos permita ver el tratamiento que la clase obrera le da al problema de la deuda y al problema del desarrollo industrial.